

ITALIA, DE *TANGENTOPOLI* AL NUEVO SISTEMA DE PARTIDOS (1992-1994)

PABLO MARTÍN DE SANTA OLALLA SALUDES¹

Fecha de recepción: marzo de 2016

Fecha de aceptación y versión definitiva: septiembre de 2016

RESUMEN: Entre 1992 y 1994 se produjo un cambio en la política italiana de extraordinaria importancia como consecuencia de los numerosos escándalos de corrupción en un proceso que se conoció bajo el nombre de Tangentopoli. Este artículo aborda las razones de dicho cambio y las consecuencias del mismo, entre las que cabe destacar la desaparición del partido hegemónico hasta el momento (la Democracia Cristiana) y de la otra formación política importante durante los años ochenta (como era el Partido Socialista Italiano). Todo ello daría lugar a una nueva realidad política que marcaría la política italiana los siguientes veinte años.

PALABRAS CLAVE: política, corrupción, hegemonía, democracia cristiana, transformación.

Italy: from Tangentopoli to the new party system

ABSTRACT: Between 1992 and 1994 there was a change in Italian politics of extraordinary importance as a result of the numerous scandals of corruption, in a process that became known with the name of Tangentopoli. This article discusses the reasons for the change and the consequences thereof, including the disappearance of the hegemonic party so far (Christian Democracy) and of the Italian Socialist Party, another important political party during the 1980s. All this would lead to a new political reality that contributed to shaping Italian politics for the next twenty years.

KEY WORDS: politics, corruption, hegemony, Christian Democracy, transformation.

¹ Profesor del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales. Universidad Europea de Madrid. Correo electrónico: pablo.martinsantaolalla@universidadeuropea.es.

1. INTRODUCCIÓN

La historiografía especializada en el tema está prácticamente de acuerdo en que hay un antes y un después en la historia de la I República italiana desde que tuvieron lugar los numerosos escándalos de corrupción bajo el fenómeno que se conoció con el nombre de *Tangentopoli*. Hasta ese momento, la política italiana había funcionado, en un primer período (1945-80), bajo la completa hegemonía de la *Democracia Cristiana* (DC), y, a partir de entonces, bajo la fórmula de los llamados «pentapartitos» (gobiernos en los que participaban hasta cinco formaciones políticas diferentes). Así, las diez primeras legislaturas que habían seguido a la aprobación de la Constitución de diciembre de 1947 habían sido prácticamente agotadas hasta el final (duraban un máximo de cinco años): excepto entre 1968 y 1987, en los que dichas legislaturas se habían limitado a cuatro años (con la excepción de 1976-79), el panorama político había estado marcado por una importante estabilidad como consecuencia del abrumador dominio de la democraciacristiana, que en cada convocatoria electoral no bajaba nunca del 30% de los votos, por no decir que solía situarse entre el 35% y el 40% de los apoyos. Y aunque era habitual que los gobiernos tuvieran escasa duración (muchos de ellos no alcanzaban el año de vida), era siempre el mismo partido el que marcaba la agenda política. De ahí que no pueda ser considerado cierto el mito de la permanente inestabilidad política italiana²: esa inestabilidad comenzará precisamente en 1992, cuando estalle *Tangentopoli*.

De ahí que nada volviera a ser igual cuando el 17 de febrero de 1992 la Policía italiana detuvo al dirigente socialista Mario Chiesa, un personaje de segunda fila en su partido, tras intentar hacer desaparecer dinero procedente de un soborno. A partir de ahí, una auténtica cascada de escándalos relacionados con una corrupción que era endémica en el sistema. La pregunta es: ¿por qué fue entonces, y no antes, cuando se destapó? El historiador italiano Matteo Re da una interesante interpretación de ello:

² Quizá sí hubo un momento en el que esa estabilidad realmente pudo venirse abajo. Fue con motivo del ascenso del Partido Comunista de Italia (PCI) en los años setenta, que llevó a proponer al ala izquierda de la democracia cristiana, encabezada por Aldo Moro, a firmar un «compromiso histórico» con los comunistas que asegurara la permanencia de esa estabilidad. Pero Moro, secuestrado por el grupo terrorista Brigadas Rojas en marzo de 1978, fue asesinado dos meses después, y con ello se liquidó cualquier posible acuerdo entre democristianos y comunistas. Acuerdo que quedó definitivamente enterrado con la irrupción de los socialistas de Bettino Craxi a finales de los setenta y con la caída del Muro de Berlín en 1989, siendo la principal consecuencia la disolución del PCI en 1991.

No era una novedad descubierta en 1992 la corrupción del sistema político italiano. El propio Craxi³, durante su declaración frente al juez Di Pietro, declaró tener conocimiento, desde que llevaba pantalones cortos, de que su partido, así como los demás partidos italianos, recibían financiación ilegal. Lo que permitió que la magistratura, a principio de los años noventa, se decidiera a actuar en contra de estas prácticas ilícitas, fue el nuevo equilibrio político a nivel internacional⁴ (...) no había necesidad de seguir protegiendo a los partidos del gobierno⁵.

A pesar de lo que acababa de conocerse, las elecciones generales fueron convocadas para abril de aquel año 1992, ya que a la undécima legislatura le quedaban solo unos pocos meses para finalizar oficialmente. El presidente de la República, Francesco Cossiga, las convocó para el 7 de abril, y los italianos, como es lógico, fueron a votar en un clima totalmente enrarecido por lo que estaba sucediendo. Dado que el asunto de la corrupción no había hecho más que comenzar, las urnas arrojaron la misma realidad de los últimos años: por ello, en primer lugar, quedó la *Democracia Cristiana* (DC); y en segundo, el *Partido Socialista Italiano* (PSI). Eso sí, hubo un importante voto de castigo, porque la DC bajó por primera vez del 30% de voto, y el PSI se quedó en un pobre 16%, mientras los dos principales beneficiarios fueron la *Liga Norte* de Umberto Bossi y el movimiento antimafia *La Rete*, formado por políticos no pertenecientes a los partidos tradicionales. De esta manera, habría que buscar un primer ministro de consenso, y, en ese sentido, las cosas se complicaron aún más cuando el presidente de la República, Francesco Cossiga, presentaba anticipadamente su dimisión el 29 de abril, sin esperar a que finalizara su mandato iniciado en el año 1985. En ese sentido, una figura tan central en la política italiana como la del presidente de la República debía ser elegido en un clima de profunda división. En principio, había de ser un representante de la *Democracia Cristiana*, porque había sido el partido más votado, si bien hay que recordar que la mayor parte de los presidentes de la República anteriores habían pertenecido a partidos distintos a la DC, con la excepción de Giovanni Leone (1971-78, quien por cierto también tuvo que dimitir anticipadamente) y el propio Francesco Cossiga.

Con toda la DC bajo sospecha, las fuerzas políticas pensaron en un político de esta formación con un expediente impoluto y libre de cualquier

³ Se refiere a Bettino Craxi, líder del Partido Socialista Italiano (PSI) entre 1976 y 1992. Craxi acabaría procesado por numerosos delitos y lograría huir en 1994 a Hammamet (Túnez), donde recibiría asilo y acabaría falleciendo a comienzos del año 2000.

⁴ Se refiere a la caída del muro de Berlín y con ello de los regímenes comunistas, proceso que concluiría con la desintegración de la Unión Soviética en 1991.

⁵ Re, M., (2016), *No quieren cambiar. Códigos, lenguaje e historia de la Mafia*, Madrid: Editorial Dikynson, , pp. 131.

posible mancha de corrupción, lo que dejaba fuera de juego a personalidades de la envergadura de Andreotti (siete veces primer ministro), Forlani o Fanfani. Así que se escogió finalmente al piemontés Oscar Luigi Scalfaro (Novara, 9 de septiembre de 1918-Roma, 29 de diciembre de 2012), un magistrado de profesión que ya había sido diputado en la Asamblea Constituyente y que, tras ejercer como subsecretario en los años cincuenta bajo las presidencias de Fanfani, Scelba y Segni, había sido ministro por primera vez de Transportes (en 1966, bajo la presidencia de Aldo Moro), una cartera que mantendría bajo los gobiernos siguientes de Giovanni Leone y de Giulio Andreotti⁶.

La figura de Scalfaro había ido cogiendo peso cuando, en los gobiernos pentapartitos de los ochenta, había sido nombrado ministro del Interior. En 1987, el presidente Cossiga le encargaría formar Gobierno, pero no lograría los apoyos necesarios para sacar adelante la tarea. En cambio, en 1992 sería elegido presidente de la Cámara de Diputados.

2. LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE SCALFARO

Hay que decir, lo primero de todo, que Scalfaro ya había sido presidente de la República de manera interina precisamente en su condición de Presidente de la Cámara de Diputados. Pero ahora debía ser elegido de manera oficial para los siguientes siete años, y no se trataba de una elección cualquiera, ya que Italia, sin saberlo en ese momento, afrontaba una de las etapas más difíciles de su historia reciente. Finalmente, el 26 de mayo, tras arduas negociaciones, Scalfaro logró el apoyo de las tres principales formaciones del arco parlamentario: su propio partido (la DC), los excomunistas del *Partido Democrático de la Izquierda* (PDS) y los socialistas del PSI. Sumaría un total de 672 votos, una cifra importante para la cantidad de electores existente (poco más de 1.000). Y, en ese sentido, la clave había estado en el cambio de postura del *Partido Democrático de la Izquierda* (PDS), al que el asesinato del juez antimafia Giovanni Falcone (acaecido en abril de ese

⁶ Parece ser que el democristiano Andreotti, en la lista que llevó al entonces presidente de la República Giovanni Leone cuando este le encargó formar gobierno, Scalfaro aparecía como titular de la cartera de Defensa, pero Leone decidió mantenerle en un ministerio de menos peso (como era Transportes) porque le consideraba un «apátrida, no perteneciente a corriente alguna de la democraciacristiana». Así lo relatan Mammarella, G. y Cacace, P., *Il Quirinale. Storia politica e istituzionale da De Nicola a Napolitano*, Roma-Bari: Editori Laterza, p. 230.

año)⁷ había dejado claro que el momento era lo suficientemente grave como para seguir con el bloqueo político de las semanas anteriores. Por mucho que Scalfaro representara lo opuesto a todo lo que ellos defendían (ya que era católico, conservador y ferviente anticomunista), el sentido de Estado, esta vez sí, se acabó imponiendo. Ello explica que también le votaran los socialdemócratas, los liberales, los ecologistas, los radicales e incluso el recién creado movimiento *La Rete*: mientras, se opondrían a su designación los republicanos, la *Refundación Comunista* (los comunistas recalcitrantes, ahora un partido minoritario), el *Movimiento Social Italiano* (los llamados «postfascistas») y la *Liga Norte*.

El 29 de mayo Scalfaro tomaba posesión de su cargo⁸ con un discurso cargado de contenido político-institucional, en el que destacaba la propuesta de reformar la Constitución, quizá como modo simbólico de regenerar la política italiana:

Invito al Parlamento a que proceda al nombramiento de una comisión bicameral con la tarea de revisar global y orgánicamente la Carta Constitucional en lo que se refiere a la articulación de las diversas instituciones (...) Atención. Hasta que no haya modificaciones grandes o pequeñas aprobadas por las Cámaras, la Constitución de 1947 es plenamente operante y debe ser respetada.

(...) Ya no es posible entretenerse en disquisiciones incluso elegantes, pero inoperantes. (...) Después de que me votarais, me paré a meditar y a rezar para pedir luz y fuerza y capacidad de sacrificio a Dios, en quien creo con tanta pobreza de corazón. Me paré a pedir protección y coraje a aquella que, humilde y alta, es madre de Dios y del hombre.

También hubo una mención al problema de la alta deuda pública, algo que aquejaría a la economía italiana hasta nuestros días:

(...) urgen sacrificios. No basta estar convencido de ellos, sino que hay que quererlos. Es preciso que el Estado sepa distribuirlos de modo que pesen más sobre quien tiene más posibilidades. (...) El abuso del dinero público es un hecho gravísimo que defrauda al ciudadano.

⁷ En relación a este asunto, como también en lo concerniente al asesinato del también juez antimafia Paolo Borsellino, puede consultarse el relato que hace Re, M., op. cit., pp. 133-137.

⁸ Recuerdan los historiadores Giuseppe Mammarella y Paolo Cacace acerca del momento en que Scalfaro accedió definitivamente a la presidencia de la República: «*Scalfaro entrava al Quirinale in uno dei momento più difficili della storia del paese: si concludeva in modo disastroso la Prima Repubblica e si apriva al buio e senza prospettive l'epoca della seconda*». («Scalfaro llegaba al Quirinale en uno de los momentos más difíciles en la historia del país: si terminaba desastrosamente la Primera República o si se abría en medio de la oscuridad y sin perspectivas la época de la Segunda República, se entiende»). Mammarella, G. y Cacace, P., op. cit., p. 232.

3. UN NUEVO GOBIERNO PARA AFRONTAR LA CRISIS GENERAL DEL PAÍS

Lo primero que tuvo que hacer el presidente Scalfaro, en virtud de los poderes que le confería la Constitución de 1947, fue nombrar un nuevo Gobierno. Y sorprendió a más de uno cuando decidió otorgar su confianza al socialista Giuliano Amato: no por su falta de capacidad política, sino porque se trataba de uno de los colaboradores más directos del ex primer ministro Bettino Craxi, sobre el que comenzaban a sobrevolar numerosas sombras de corrupción. En efecto, el 29 de junio Amato presentó un gobierno que podía ser considerado «cuatripartito» y que estaba formado por hasta 24 ministros. Entre los hechos más llamativos estaba la exclusión del mismísimo Giulio Andreotti, que aspiraba a volver a dirigir la cartera de Asuntos Exteriores, cartera al frente de la cual, por cierto, había estado en numerosas ocasiones. Con ello se iniciaba un lento pero inevitable declive del que había sido siete veces primer ministro y que acabaría con éste sentado en un banquillo acusado de participar en el asesinato de un periodista, asunto al que haremos mención más adelante.

En realidad, la exclusión de Andreotti, dominador de la DC desde el fallecimiento de Alcide de Gasperi, había sido propiciada por su propio partido, y, en particular, por el secretario general en funciones del mismo, Arnaldo Forlani, quien había hecho aprobar poco tiempo antes una norma interna por la que los ministros democristianos tendrían que renunciar a la condición de parlamentarios para formar parte del Gobierno. Y Andreotti, como senador vitalicio, no podía hacerlo, así que se quedó fuera del nuevo Ejecutivo. El problema es que esta norma estuvo a punto de dejar a Amato sin varios de los democristianos con los que él contaba, como era el caso de Vincenzo Scotti o Nicola Mancino, quienes habían advertido previamente que, entre ser ministros de un Gobierno que podía ser más que efímero ante la crisis que se vivía en ese momento, o parlamentarios por cinco años, se acabarían inclinando por lo segundo. Finalmente, Mancino aceptó la cartera de Interior y Scotti la de Asuntos Exteriores.

A su vez, Defensa recaería en manos del socialista Salvo Andó, y Presupuestos para el también socialista Franco Reviglio, mientras Finanzas iría a parar a manos de Giovanni Goria, ex Primer Ministro democristiano y político que fallecería prematuramente a causa de un cáncer y quien, por cierto, en ese momento se encontraba investigado. Por último, el ministerio del Tesoro sería para Piero Barucci, democristiano también y Consejero del *Crédito Italiano*, sustituyendo a su compañero de filas Guido Carli. Otras caras nuevas en el Gobierno eran las del socialista Carlo Ripa di Meana,

nuevo ministro de Medio Ambiente, y de Alberto Ronchey, ministro para los Bienes Culturales. Como puede comprobarse, se trataba de un Gobierno compartido básicamente entre la *Democracia Cristiana* (DC) y el *Partido Socialista Italiano* (PSI), bajo la presidencia de un Giuliano Amato que, por cierto, en 2000 volvería a presidir un Gobierno. El 3 de julio el Gobierno Amato obtenía la confianza de la cámara alta o Senado. Además de los votos previstos de los partidos del «cuatripartito» (democristianos, socialistas, socialdemócratas y liberales), hasta diez senadores más votaron a favor de ellos. Dos días después, el 5 de julio, era la Cámara de Diputados la que otorgaba confianza al nuevo Gobierno.

La economía se encontraba en un momento de graves dificultades y por ello el Ejecutivo presidido por Amato no tardó en presentar (11 de julio) un plan de choque. Con un déficit público previsto para ese año de 30 billones de liras, el Gobierno no tuvo más remedio que aprobar un impuesto extraordinario sobre los patrimonios inmobiliarios y los saldos en cuentas corrientes y de depósito. En ese sentido, Amato se había comprometido previamente a que el saneamiento de las finanzas públicas se hiciera por medio de medidas estructurales y no con lo que en lenguaje italiano se conocía como «maniobras». Así, la intervención fiscal de emergencia giraría en torno al impuesto patrimonial ya mencionado, que en principio debía proporcionar a la Hacienda italiana unos ingresos suplementarios de unos 11 billones de liras, y también en torno a un plan de privatizaciones que esperaba ingresar en solo 6 meses unos 6.5 billones de liras. El agujero del Estado se reduciría en otros 15 billones de liras como consecuencia de recortes en los gastos, aunque, según Amato, sin afectar a la Sanidad ni a las pensiones.

4. LA MAFIA SIGUE AMENAZANDO LA ESTABILIDAD DEL PAÍS

Amato tuvo que afrontar durante aquellos meses no sólo las consecuencias derivadas de *Tangentopoli*, y también de la profunda crisis económica, sino también una nueva oleada de atentados de la Mafia. Ésta se había cobrado ya la cabeza de nada más y nada menos que del juez antimafia Giovanni Falcone (y poco antes del diputado democristiano Salvo Lima), pero no se conformaba. El mismo 11 de julio en que el Gobierno presentaba su plan de choque, estallaban dos bombas en oficinas españolas en la ciudad de Milán, mientras el líder del movimiento antimafia italiano *La Rete*, Orlando, recibía amenazas de muerte. Pero el 20 de julio llegó la peor noticia: Paolo Borsellino, juez antimafia e íntimo colaborador de Falcone, también caía víctima

de un atentado de la Mafia⁹. Mientras, la operación *Mani Pulite* («Manos Limpias») puesta en marcha para combatir la galopante corrupción seguía su curso, siendo investigado en el mes de julio Gianni de Michelis, ministro de Asuntos Exteriores en el anterior Gobierno y ahora acusado de haber cobrado comisiones por obras públicas realizadas en la ciudad de Venecia.

Al tiempo que se combatía la acción de una Mafia cada vez más agresiva, en la segunda semana de julio el Gobierno comenzó el proceso de transformación de los grandes grupos empresariales del Estado italiano (*ENI, ENEL, INA, IMI, BNL e IRI*¹⁰) en sociedades anónimas: es decir, un amplio proceso de privatización (aunque aún no se sabía cuánta participación del Estado habría) para obtener fondos con los que poder combatir la altísima deuda pública. Hay que decir que estas privatizaciones ya habían sido iniciadas como consecuencia de una ley de privatizaciones aprobada por el anterior Gobierno de Giulio Andreotti, pero su aplicación había quedado en suspenso durante el largo interregno abierto por las elecciones generales de 5 de abril.

Sin embargo, la calma en la política italiana duró muy poco. El 29 de julio, solo un mes después de nombrar su gobierno, Amato veía como presentaba su dimisión Vincenzo Scotti, ministro de Asuntos Exteriores: había preferido quedarse con el cargo más seguro de diputado de la *Democrazia Cristiana* (DC) ante el escaso futuro que se auguraba al Ejecutivo de Amato. Lo peor es que esta dimisión vino acompañada, unos días después, de la renuncia de otro compañero tanto de Gobierno como de partido, Claudio Vitalone, ministro de Comercio Exterior¹¹. Amato cerraría la crisis con la designación de uno de los veteranos de la DC (el ex primer ministro Emilio Colombo, de 72 años) para Asuntos Exteriores, mientras para Comercio Exterior nombraría a Giorgio Moschetti. La «solución Colombo» fue particularmente acertada, ya que eran bien conocidas sus posiciones europeístas: en ese momento, era europarlamentario, e incluso había llegado a presidir el Parlamento Europeo. Además, conocía bien la cartera, ya que había sido hasta en seis ocasiones titular de Asuntos Exteriores, obteniendo el premio

⁹ Como consecuencia de ello, unos días después hasta ocho fiscales de la Dirección Antimafia de Palermo presentaban su dimisión por la falta de protección para desarrollar su trabajo.

¹⁰ Para hacernos una idea de la importancia de estas empresas públicas, el *IRI* era el primer grupo industrial del país, con un total de 420.000 empleados y una facturación de 77 billones de liras, mientras que el *ENI* (dedicado a la petroquímica) tenía 131.000 empleados y 48 billones de facturación. También era destacable el peso de la empresa eléctrica *ENEL*, con 122.000 empleados y una facturación de 27 billones de liras.

¹¹ *Corriere della Sera*, 30 luglio 1992.

Carlomagno en 1979 por su acción en favor de la integración del Viejo Continente¹².

Pero no todo iban a ser obstáculos para Amato, ya que los principales sindicatos aceptaron por aquellos días sacrificar los salarios en favor de la estabilidad política. En efecto, la *Confederación General Italiana de Trabajadores* (CGIL) firmaba la desaparición de la «escala móvil» (es decir, la adecuación automática de los sueldos a la inflación). A esta medida se unieron los otros dos sindicatos principales: CISL, de mayoría democristiana, y UIL, socialista. El Presidente de la República, Oscar Luigi Scalfaro, se manifestaría satisfecho por el acuerdo y reconocería que era a los trabajadores a quienes se había pedido «un especial sacrificio». Lo cierto es que, tras el acuerdo firmado, la Bolsa subiría, la lira daría síntomas de recuperación y la banca de Italia bajaría medio punto la tasa de descuento. No obstante, el sacrificio sindical no ocultaba la gravedad de la situación, ya que la «escala móvil», tras 46 años de existencia, había constituido una de las mayores conquistas de los trabajadores italianos en los últimos decenios¹³.

Al mismo tiempo, el Gobierno comenzaría a aprobar la legislación que le permitiera combatir contra la Mafia. En efecto, el Senado dio el «visto bueno» a un decreto antimafia, elaborado tras el asesinato del juez Falcone y endurecido después del de su colega Borsellino. Al mismo tiempo, las autoridades anunciaban la prohibición de los vuelos a baja altura en el espacio aéreo de Palermo, con el fin de evitar que la Mafia pudiera atacar desde el aire objetivos de la capital siciliana. Además, el decreto fomentaba la infiltración de los servicios secretos en la *Cosa Nostra*; castigaba con hasta seis años de cárcel a los políticos que compraran votos mafiosos; incrementaba los poderes de la Policía, incluso a costa de los de los jueces; fijaba medidas de protección para los arrepentidos; y endurecía el trato penitenciario de quienes no colaborara con la justicia. En ese sentido, el ministro del Interior, Nicola Mancino, expresaría su satisfacción al ver que el decreto no sólo era aprobado en la Cámara por los cuatro partidos de la coalición (democristianos, socialistas, socialdemócratas y liberales), sino también con los votos de republicanos, del *Movimiento Social Italiano*, del *Partido Democrático de la Izquierda* (PDS) y de la *Liga Norte*¹⁴.

Mientras, la investigación de *Mani Pulite* seguía cobrándose víctimas. Sergio Moroni, diputado y miembro de la ejecutiva nacional del *Partido Socialista Italiano* (PSI), decidió quitarse la vida en su casa de Brescia. Moroni había sido citado a declarar por el escándalo de las comisiones en Milán:

¹² Véase al respecto *La Repubblica*, 2 agosto 1992.

¹³ *Corriere della Sera*, 5 settembre 1992.

¹⁴ *Corriere della Sera*, 7 agosto 1992.

a su difícil futuro procesal se añadía, parece ser, el hecho de que sufría un grave tumor en el riñón¹⁵. Moroni tenía encima de la mesa dos peticiones de procesamiento por cobro de comisiones ilegales en Milán. Con su trágico final engrosaba así el tercer puesto de la lista de los implicados en el escándalo que habían tomado el suicidio como salida extrema, y el segundo perteneciente al PSI tras Renato Amorese, secretario del partido en la localidad de Lodi. El tercero era un empresario, Mario Majocchi. Al mismo tiempo otros, como el financiero Salvatore Ligresti, el sexto hombre más rico de Italia, se encontraban en prisión desde el inicio del verano.

Con tanto escándalo en torno a su partido, no resulta de extrañar que a Bettino Craxi, todavía Secretario General del PSI, le salieran competidores por la dirección del partido. El primero en hacerlo fue Claudio Martelli, en ese momento ministro de Justicia, quien se presentó ante la opinión pública como el símbolo de la «regeneración» del PSI y el germen de un «centro laico-socialista» que aglutinara, «sin absorciones», a la izquierda italiana frente a la *Democracia Cristiana* (DC). Es más, Martelli acusó sin contemplaciones a Craxi de ser un «conservador», y más duro fue aún con el portavoz de Craxi (Ugo Intini), al que tildó de «estalinista»¹⁶. Había comenzado la batalla por la sucesión de Craxi sin saber... que el partido estaba al borde de la desaparición.

Las cosas tampoco iban mucho mejor en el primer partido del país, la *Democracia Cristiana* (DC), ya que Arnaldo Forlani, su secretario general desde febrero de 1989, confirmó el 28 de septiembre que dimitía de su cargo. Sin embargo, la batalla en el seno del socialismo no daba tregua. Giulio Di Donato, uno de los dos vicesecretarios del *Partido Socialista Italiano* (el otro era De Michelis, que de momento mantenía su fidelidad a Craxi) decidió presentar su dimisión a Craxi como protesta por los métodos poco democráticos que éste, a su juicio, estaba aplicando a la crisis interna del PSI¹⁷. El problema es que Craxi ya había elegido a su sucesor, y este no era ni Martelli ni Di Donato, sino precisamente el primer ministro amato. Y lo justificó de la siguiente manera: «Cuando un político, un exponente de un partido, llega a primer ministro en una democracia, es evidente que en ese mismo momento asume un liderazgo que afecta a la función del partido, la responsabilidad del partido, incluso hacia afuera. Y yo le he ayudado, sabiéndolo perfectamente»¹⁸. En todo caso, la intención de Craxi era la de permanecer al frente del partido. Pero, volviendo a los asuntos de gobierno,

¹⁵ *Corriere della Sera*, 3 settembre 1992.

¹⁶ *La Repubblica*, 19 settembre 1992.

¹⁷ *La Repubblica*, 7 novembre 1992.

¹⁸ *Corriere della Sera*, 8 novembre 1992.

cuando más lo necesitaba, Amato pudo anotarse su primer éxito como primer ministro en la lucha contra la Mafia. En efecto, en la primera semana de noviembre de 1992, y gracias a la confesión de dos «arrepentidos», se realizó la mayor «redada» contra la Mafia desde el 1984, en los mejores años políticos del hombre ahora caído en desgracia (Bettino Craxi). Así, más de 2.000 agentes de policía se movilizaron por toda Italia para realizar un centenar de detenciones al amparo de 203 órdenes de busca y captura emitidas por la Fiscalía de Caltanissetta, en la provincia siciliana de Agrigento. Lo más grave es que de los 106 avisos de apertura de sumario, tres de ellos afectaban, una vez más, a políticos italianos, en concreto dos diputados y un senador (dos democristianos y un socialdemócrata). Además de estos políticos, entre los arrestados figuraban alcaldes, constructores, agentes inmobiliarios, abogados penalistas e incluso un director de cine, Giuseppe Greco, hijo del capo palermitano aliado de los corleoneses, Michele Greco. Las detenciones se realizaron en el sur del país (Sicilia y Calabria), y también en el centro (Lazio y Toscana) y norte (Piamonte y Lombardía), aunque la mayoría de los arrestados eran originarios de Agrigento (por tanto, sicilianos)¹⁹.

5. CRAXI, EN CAÍDA LIBRE

Al tiempo que la figura política de Amato se iba consolidando, su jefe de filas Craxi comenzaba su particular caída. El primer golpe provino, en ese sentido, de su propio partido, ya que, en la Asamblea Nacional del PSI, aquella que había estado rendida a sus pies en los últimos quince años, le retiraba parte de su apoyo: de los 665 delegados que integraban la asamblea, Craxi obtendría sólo 309 votos, frente a los 160 de Martelli, su antigua «mano derecha» y ahora líder de la oposición a su liderazgo. Eso sí, Martelli no perdió la ocasión de pedir la celebración de un Congreso extraordinario, ya que, a su juicio, la alternativa del PSI era «renovarse o morir»²⁰.

Pero Craxi no era el único socialista en serios apuros. Porque por aquellos días la Cámara de Diputados de Italia autorizó el procesamiento del ex ministro de Asuntos Exteriores y aún Vicesecretario del PSI, Gianni De Michelis, acusado por la Fiscalía de Venecia de corrupción e infracción de la ley sobre la financiación de los partidos políticos. En concreto, los presuntos delitos por los que los jueces investigaban a De Michelis se referían a adjudicaciones públicas del Ayuntamiento y la Provincia de Venecia, de

¹⁹ *La Repubblica*, 18 novembre 1992.

²⁰ *Corriere della Sera*, 17 novembre 1992.

la que procedía el exministro y en la que había creado una fuerte corriente dentro del PSI²¹.

Como era de esperar, a los socialistas sólo podía sucederles una cosa en las elecciones municipales italianas: un fuerte castigo por parte de los electores. En efecto, el PSI fue el peor parado en unas elecciones municipales celebradas en más de cincuenta municipios del país y en la provincia de La Spezia, aunque no el único: también hubo una clara derrota para la *Democrazia Cristiana* (DC), siendo más moderado el retroceso vivido por el *Partido Democrático de la Izquierda* (PDS). Así, solo la *Liga Norte*, el movimiento antimafia *La Rete*, los postfascistas del *Movimiento Social Italiano* (MSI) y *Refundación Comunista* ganaron cuotas electorales en estos comicios, que confirmaron la tendencia a la división del voto. En ese sentido, la *Democrazia Cristiana* (DC) bajaba globalmente 5.3 puntos respecto a las generales de abril de ese año, mientras que el PSI perdía 3.7 puntos: sin embargo, la situación de los socialistas era más que preocupante porque el partido parecía tender a desaparecer en el norte industrializado²².

En todo caso, la pérdida de votos era lo de menos para Craxi, a quien esperaba un durísimo horizonte judicial. Porque solo un día después de las elecciones municipales recibió la visita de un carabiniere que le notificó formalmente que la fiscalía de Milán le había abierto un sumario por los presuntos delitos de corrupción, encubrimiento y quebrantamiento de la ley sobre financiación de los partidos políticos. Así, las investigaciones contra Craxi le implicaban en la percepción ilegal de uno 300.000 millones de liras (unos 24.000 millones de pesetas de la época) para el partido, y se basaban en las declaraciones del ex secretario general Giacomo Mancini, miembro de la izquierda del PSI, quien la semana anterior habría declarado a los jueces de «Manos Limpias» que el líder del partido (por tanto, Craxi) estaba siempre al corriente de todos los temas financieros. La respuesta de Craxi fue: «Una parte de la financiación de los partidos políticos es irregular o ilegal. Me refiero a todos los partidos (...). Volveré a hablar del tema en el Parlamento, y esta vez, a fondo. Estoy acostumbrado a usar el lenguaje de la verdad»²³.

²¹ *La Repubblica*, 11 diciembre 1992.

²² *Corriere della Sera*, 15 diciembre 1992.

²³ *Corriere della Sera*, 18 diciembre 1992. Unas semanas después, Roberto Spallarossa, implicado en el escándalo de las comisiones ilícitas que había salpicado a empresarios y políticos, decidió suicidarse en Pavía, con lo que ya ascendía a nueve el número de personas implicadas en el escándalo que había decidido quitarse la vida.

Pero la realidad es que los problemas con la justicia italiana no habían hecho más que comenzar para Craxi. Porque unas semanas después la magistratura de Milán le abrió un segundo sumario por presuntos delitos de corrupción, receptación y quebrantamiento de la ley de financiación de los partidos políticos, en base a hechos similares a los que habían justificado la apertura del primer sumario. Lo que más llamaba la atención es que de momento Craxi era el único alto dirigente acusado por la justicia italiana. Eso sí, la Comisión Antimafia del Parlamento decidió por aquellos días citar al siete veces primer ministro, el democristiano Giulio Andreotti, para que declarara sobre las acusaciones de presuntos contactos suyos con la Mafia hechas por cuatro arrepentidos²⁴.

El 18 de enero de 1993 saltaba la noticia que muchos esperaban desde que unos meses antes fueran brutalmente asesinados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino: Salvatore «Totó» Riina, fugitivo de la justicia desde 1969, miembro de la cúpula de la Mafia desde 1975 y jefe indiscutible desde comienzos de los años ochenta de la Mafia siciliana (la *Cosa Nostra*) había sido detenido²⁵ en el centro de Palermo cuando se desplazaba en un coche. Iba, por cierto, desarmado, con documentos de identidad falsos y acompañado únicamente por otra persona. Según Nicola Mancino, ministro del Interior, Riina era el culpable de los asesinatos de Falcone y Borsellino. Eso sí, Mancino tuvo que reconocer que la detención de Riina no implicaba, sin embargo, el fin de la *Cosa Nostra*, porque la organización mafiosa tenía una importante envergadura que trascendía a una sola persona.

6. LA SITUACIÓN ECONÓMICA EMPEORA

No todo eran buenas noticias para Amato, ya que la economía seguía dando síntomas de flaqueza. La producción industrial se encontraba, a comienzos del año 1993, un 3.7% por debajo de su nivel de un año antes; evolucionaban también a la baja las carteras de pedidos y las ventas, incluidas las exportaciones, que además no acusaban el impacto positivo que cabía esperar de la devaluación de la lira; el déficit público no daba señales de tregua y sólo la inflación, reducida hasta cerca del 4%, permitía un cierto alivio. De esta manera, el desempleo comenzaba a ser la preocupación dominante entre los italianos.

²⁴ *La Repubblica*, 9 gennaio 1993.

²⁵ Para más detalles, puede consultarse la obra de Paul Ginsborg titulada *L'Italia del tempo presente*. Milano, Eniaudi, 1998, pp. 514 y ss.

Pero no todo quedaba allí, porque eran muchos más los problemas, hasta el punto de que algunos observadores hablaban ya de un peligro real de colapso de la economía nacional. La situación era sencillamente crítica: las dos cámaras legislativas italianas discutían los proyectos de ley en un permanente clima de crispación, mientras que los empresarios no sabían a qué atenerse y los financieros no se atrevían a dar un paso en falso. Aunque oficialmente Italia no había entrado en recesión, la preocupación era creciente. Para algunos, el principal problema de la economía italiana no era el escándalo político y la consiguiente crisis institucional, sino el excesivo peso del sector público y el constante crecimiento de la deuda pública. Y es que la deuda pública había crecido en los últimos diez años (1982-92) a un ritmo muy superior al Producto Interior Bruto (PIB), situándose ya en el 108% de este. En ese sentido, la mezcla de la crisis institucional, la inestabilidad de la lira y la altísima deuda pública situaban a la economía italiana en una fragilidad sin precedentes. Hasta el punto de que algunas entidades financieras extranjeras habían llegado a comentar la conveniencia de que el Estado tomara una medida drástica, que no era otro que consolidar esa misma deuda, pagando tan sólo los intereses, pero absteniéndose de devolver el principal monto de la misma.

Esa medida, junto con un amplio programa de privatizaciones para un Estado hipertrófico, permitiría acabar con el excesivo peso del Estado en la sociedad y en la economía. Tanto Amato como su ministro del Tesoro, Piero Barucci, eran partidarios de estas privatizaciones, pero se encontraban con la cerrada oposición del ministro de Industria, Giuseppe Guarino. Dada la fragilidad del gabinete, en lugar de cesar a Guarino, Amato creó un nuevo ministerio sin cartera «para el reordenamiento de las participaciones estatales», al frente del cual pondría el 21 de febrero a Paolo Baratta, quien iniciaba así una carrera política al más alto nivel que le permitiría ser el ministro de Comercio Exterior durante el siguiente gobierno (el encabezado por Carlo Azeglio Ciampi). ¿Cuáles eran los principales activos públicos que podían pasar a manos privadas? Básicamente, los que pertenecían al *IRI*, a *ENI* y a *ENEL* (cuyos presidentes, por cierto, se encontraban en ese momento detenidos por el escándalo de la corrupción), así como el grupo asegurador *INA* y el bancario que giraba en torno a la *Banca Nazionale de Lavoro* (BNL).

7. LAS LUCHAS INTERNAS EN EL PSI

Y, a todas estas, con Craxi ya dimitido, el PSI intentaba recobrar el pulso. En efecto, a comienzos de febrero tendría lugar la elección de su sucesor, que sería finalmente el ex sindicalista Giorgio Benvenuto. En la elección final, los candidatos habían sido el propio Benvenuto y el ex vicesecretario del PSI, Valdo Spini, un jurista y economista florentino (por cierto, de religión protestante en un país de gran tradición católica) que era considerado, en aquel momento, una de las figuras más honestas y de prestigio intelectual que podía presentar el partido. El resultado sería muy ajustado: Benvenuto obtendría un 57% de los votos frente al 43% de Spini, lo que daba una idea de la división existente. Según parece, habían votado por el vencedor los seguidores de Craxi, la izquierda institucional del PSI que dirigía Claudio Signorile, y el propio primer ministro Giuliano Amato. Mientras, Spini había recibido el apoyo de los «martellianos» (los seguidores de Claudio Martelli) y de los sindicalistas que convivían con los excomunistas de la central mayoritaria (CGIL), encabezados por Ottaviano del Turco. Hay que recordar, en ese sentido, que el mandato de Benvenuto tenía una cierta provisionalidad, ya que la elección definitiva del secretario general le correspondía, por estatutos, a un congreso programado para unos meses después²⁶.

El primer ministro Amato nombraría en la segunda semana de febrero a Giovanni Conso como nuevo ministro de Justicia en sustitución del dimisionario Martelli. Conso era ex presidente del Tribunal Constitucional y había logrado hacerse célebre en Italia por su defensa de las libertades y por su oposición a la legislación extraordinaria aprobada en los años setenta para combatir el terrorismo. Mientras, Craxi ya había comenzado a amenazar con hacer revelaciones explosivas en la batalla para limpiar su nombre de las acusaciones de corrupción. «Voy a tener que hacer públicas muchas cosas», dijo Craxi, que para ese momento tenía ya seis sumarios abiertos²⁷ por su presunta relación con la financiación ilegal de su partido y acababa de dejar dejó su cargo en el PSI tras 16 años de liderazgo indiscutido.

Mientras, la inestabilidad provocada por las investigaciones judiciales de la Operación «Manos Limpias» también se estaba dejando notar en la *Democrazia Cristiana* (DC). El dirigente Mario Segni propuso a mediados de febrero al secretario general de la DC, Mino Martinazzoli, «romper con la

²⁶ Véase al respecto *Corriere della Sera*, 13 febbraio 1993.

²⁷ Dentro de la clase política, solo le superaba Severino Citaristi, secretario administrativo de la DC, quien se negaba a dejar su escaño de senador.

parte de la DC» afectada por la investigación²⁸. Porque el asunto comenzaba a pintar cada vez peor para todos: un año después de la detención de Mario Chiesa, había ya 828 detenidos, 1.003 sumarios abiertos y 75 peticiones de autorizaciones para procesar a parlamentarios.

En ese sentido, el 19 de febrero el Gobierno Amato sufría un nuevo golpe: el liberal Francesco De Lorenzo, ministro de Sanidad, veía cómo la Cámara de Diputados autorizaba el miércoles su procesamiento en Nápoles por haber logrado votos a cambio de favores. Sin embargo, De Lorenzo se negaba a dimitir y su partido advertía de que cualquier intento de sacarlo de su puesto determinaría la retirada del *Partido Liberal* de la mayoría y, por tanto, la caída del Gobierno. El problema es que al tiempo que la posición de De Lorenzo se tambaleaba, se añadió a la misma la del ministro de Finanzas, el democristiano Giovanni Goria, también acusado de corrupción (se le relacionaba con un fraude bancario cometido a finales de los setenta). El 20 de febrero ambos ya estaban fuera del Gobierno tras haber presentado su dimisión. A Goria le sustituiría Franco Reviglio, y a De Lorenzo, Raffaele Costa.

Pero lo cierto es que el Gobierno comenzaba a tener los días ya prácticamente contados: en menos de un año habían caído Vincenzo Scotti (Asuntos Exteriores), Claudio Martelli (Justicia), Giovanni Goria (Finanzas) y Francesco De Lorenzo (Sanidad). Es decir, cuatro bajas en ocho meses, a una cada dos meses. Y las que faltaban por producirse. No resulta de extrañar, por tanto, que sólo dos meses después el primer Gobierno encabezado por Giuliano Amato acabara cayendo. De momento, Amato recurriría al voto (el undécimo) de la Cámara de Diputados, logrando la confianza de los parlamentarios de la cámara baja a la continuidad de su ejecutivo.

No resulta de extrañar que, ante tal aluvión de casos de corrupción, Amato pensara que la mejor solución fuera aprobar medidas de perdón, lo que encontraría una fuerte oposición en la calle. Finalmente, el 6 de marzo el Gobierno aprobó el grueso del paquete de medidas propuesto por el ministro de Justicia (Giovanni Conso), como «solución política» a la desestabilización creada por el escándalo de la financiación ilegal de los partidos políticos. Así, tales conductas quedaban a partir de ese momento despenalizadas, con efectos retroactivos, y sujetas a meras sanciones pecuniarias y de inhabilitación para ejercer cargos públicos o privados. La reforma ofrecía, además, la posibilidad de que los reos de corrupción o prevaricación evitaran la cárcel si confesaban ante el juez. «No se trata de ningún borrón y cuenta nueva, ya que las conductas despenalizadas siguen sujetas a duras sanciones de tipo administrativo», dijo Conso al presentar los tres proyectos

²⁸ *Corriere della Sera*, 15 febbraio 1993.

de ley y cuatro decretos aprobados la noche anterior. Y añadió: «¿Qué le interesa a la justicia? ¿Los largos procesos penales, de 8, 9 o 10 años, que a veces ni siquiera concluyen, o una sanción administrativa, rápida y eficaz? Es claro que lo segundo. Despenalizar es lo moderno y es lo que hemos hecho»²⁹.

Al que no convenció lo que se conocería como «decreto salva-ladri» («decreto salva-ladrones») fue al ministro de Medio Ambiente, Carlo Ripa di Meana, que tres días después, el 9 de marzo, ponía encima de la mesa de Amato su dimisión irrevocable, siendo sustituido por Valdo Spini. Con Ripa di Meana eran ya cinco los ministros que caían. Pero mucho más importante que la dimisión de Ripa di Meana fue la negativa del presidente Scalfaro a firmar ese polémico decreto, lo que obligó al Ejecutivo a reconsiderar la medida. No era, sin embargo, la última dimisión dentro del Gobierno. El 22 de marzo caía el quinto ministro. Se trataba del titular de Agricultura, el democristiano Giovanni Fontana, quien acababa de recibir la notificación de que le había sido abierto un sumario por presunta «receptación continuada y violación de la ley de financiación de los partidos políticos». Le sustituyó Alfredo Diana, democristiano que desde 1979 había trabajado como parlamentario.

Mientras, la figura de Andreotti, en ese momento senador vitalicio, se iba llenando cada vez más de sombras. A comienzos de marzo de 1993 sería llamado a declarar como testigo por los jueces que investigaban la muerte (aparentemente por suicidio) de Sergio Castellari, ex director general de Participaciones Estatales, quien se había quitado la vida el 18 de febrero al saberse implicado en un sumario por corrupción abierto al grupo químico *Enimont*. Andreotti, primer ministro y, transitoriamente, ministro de Participaciones Estatales en la época a que se referían los hechos, había recibido la visita de Castellari la misma mañana en que éste había decidido acabar con su vida. Andreotti declarararía que Castellari le había visitado para informarle de «que dejaba el servicio, no queriendo esperar a la supresión del ministerio». Según el senador vitalicio, Castellari le había mostrado su preocupación porque «(...) habían secuestrado en su casa papeles del ministerio, que sus secretarías habían empaquetado cuando lo dejó. Parecía preocupado, pero, a una pregunta mía, respondió que no había hecho nada incorrecto. Yo no pensaba que estuviese meditando el suicidio»³⁰, afirmó el veterano político democristiano.

²⁹ *Corriere della Sera*, 6 marzo 1993.

³⁰ Véase al respecto *La Repubblica*, 4 marzo 1993.

Pero la realidad era que el cerco se estrechaba contra Andreotti, aunque éste, a diferencia de Craxi, no tendría que acabar exiliándose. Así, el 28 de marzo la fiscalía de Palermo abrió un sumario contra el ex primer ministro por «presunta actividad mafiosa». Andreotti no tardó en defenderse:

La noticia me amarga profundamente, pero no me sorprende porque había leído en los periódicos absurdas declaraciones de arrepentidos y porque, desde hace tiempo, soy objeto de ataques calumniosos por parte del exalcalde Orlando. Resulta paradójico que a mí me acusen de Mafia³¹.

En realidad, Andreotti pertenecía a un partido que tenía el llamativo «honor» de tener el mayor número de parlamentarios investigados. Sumando el conjunto de las fuerzas políticas, el número de sumarios abiertos a parlamentarios por investigaciones sobre la corrupción relacionada con la financiación de los partidos políticos se elevaba ya a 151. En ese sentido, el partido que más había «merecido» estos procedimientos era la *Democracia Cristiana* (DC), con 79 sumarios, que representaban aproximadamente un tercio más que los 54 correspondientes a diputados o senadores socialistas. Luego había nueve sumarios abiertos a parlamentarios del *Partido Democrático de la Izquierda* (PDS); cuatro al *Partido Republicano Italiano* (PRI); tres al *Partido Socialdemócrata Italiano* (PSDI); y dos al *Partido Liberal Italiano* (PLI).

Sin embargo, una cosa era la cifra exacta de parlamentarios investigados, y otra la de sumarios por parlamentario. Así, el parlamentario más investigado seguía siendo el exSecretario administrativo democristiano, Severino Citarista, con nada más y nada menos que 20 sumarios. Le seguía Bettino Craxi, con 12. Por si fuera poco tener doce procedimientos abiertos, Craxi había tenido que ver el 10 de marzo cómo los diputados de la cámara baja emitían un primer voto favorable a su procesamiento. Sin problemas penales, pero con cada vez menor porvenir político estaba su compañero de partido y primer ministro Giuliano Amato, quien el 11 de marzo tuvo que comparecer en el Senado para pedir la confianza de la cámara. Una jornada parlamentaria que se convirtió en un cúmulo de insultos, amenazas y gritos impropio de políticos civilizados. Votaron por su continuidad 143 de los 242 senadores presentes en el debate. «No es posible que me sigan pidiendo públicamente que dimita, cuando, en privado, me dicen que continúe», dijo Amato. Y añadió: «¡Basta! A callar. ¡Os diré lo que nadie os ha dicho!»³², gritó Amato exasperado hacia los bancos de la izquierda

³¹ *Corriere della Sera*, 28 marzo 1993.

³² Véase al respecto *Corriere della Sera*, 11 marzo 1993.

comunista y excomunista, que le impedían hablar con sus gritos de «¡Bufón!» y «¡Dimisión!» reiterados en grandes pancartas.

Sin embargo, aquello era sencillamente imparable. Y era imparable porque cada vez eran más las fuerzas políticas bajo la lupa de la Justicia italiana. Fue precisamente en aquellos días cuando Renato Altísimo, secretario del *Partido Liberal Italiano* (PLI)³³ tuvo que presentar su dimisión como máximo líder de la formación tras recibir la notificación de que le ha sido abierto un sumario por el presunto cobro ilegal de comisiones devengadas por el *Enel*, el grupo eléctrico propiedad del Estado italiano. Aunque Altissimo rechazó con firmeza cualquier posible cargo, lo cierto es que abandonaba la dirección del partido. Lo peor para Amato y su cada vez más frágil Gobierno es que su formación era la única de las cuatro que formaban parte de la coalición de Gobierno (junto con democristianos, socialistas y socialdemócratas) donde aún no se había dado ningún escándalo de la corrupción.

Pero es que las cosas en la oposición tampoco iban mucho peor. Porque también en aquellos días Giorgio La Malfa, secretario del *Partido Republicano Italiano* (PRI), partido que había formado parte de la coalición gubernamental hasta abril de 1991, también presentaría su dimisión al recibir la primera notificación de apertura de sumario³⁴. Y, mientras, caían los políticos de los principales partidos: Riccardo Misasi, exministro democristiano, acababa de recibir una petición de encarcelamiento por formar parte de una especie de «comité de negocios» a través del cual empresarios, mafiosos y políticos se repartían presuntamente las obras públicas de la ciudad de Reggio Calabria. Y en Nápoles dos socialistas, uno de ellos el ex vicesecretario del PSI (Giulio Di Donato), junto con un político democristiano, se encontraban en ese momento investigados por el cobro de importantes comisiones con ocasión de la privatización de las limpiezas municipales³⁵.

³³ A pesar de tratarse de un partido que difícilmente superaba el 2% de los votos, había formado en numerosas ocasiones parte del Gobierno durante décadas. Solo unos días después, era el vicesecretario del partido, Attilio Bastianini, quien era detenido en Roma acusado de “corrupción agravada y violación de la ley de financiación de los partidos”.

³⁴ A diferencia de Antonio Cariglia, exsecretario general del Partido Socialdemócrata, quien seguía como presidente de su partido a pesar de que tenía ya dos sumarios abiertos.

³⁵ *La Repubblica*, 17 marzo 1993.

8. AMATO DIMITIÓ Y LE SUSTITUYE CARLO AZEGLIO CIAMPI

Harto de tanta dimisión y de verse rodeado de excesiva corrupción, Amato le comunicó ya a finales de marzo al presidente Scalfaro su intención de dimitir, a pesar de no llevar siquiera un año al frente del Gobierno, y de que la legislatura no había hecho más que comenzar. Porque el 31 de marzo había llegado la sexta dimisión, y no se trataba de una cartera menor: Franco Reviglio, ministro de Finanzas, abandonaba el Gobierno, en este caso por presuntas irregularidades cometidas cuando presidía el grupo petrolero estatal *ENI*. Amato, además de asumir interinamente la cartera de Reviglio, comunicó al Presidente de la República su intención de renunciar a su cargo de primer ministro, y entonces Scalfaro comenzó a tantear posibles sucesores. La cuestión no era nada sencilla. Con prácticamente todo el arco parlamentario enfangado en la corrupción, y con una crisis económica galopante, la tarea de encontrar un sucesor a Amato resultaba algo más que titánica. Y, mientras, la lira seguía depreciándose, colocándose por debajo del límite histórico de 1.000 liras frente al marco.

Un día después, el 1 de abril, ya se sabía algo sobre el nuevo gobierno: entrarían en él políticos excomunistas, en un intento de dar un giro a la izquierda ante el hecho de que la centroderecha, junto con los socialistas, era el más lastrado por la corrupción. Más aún cuando se abrieron dos sumarios contra Andreotti y Forlani, los dos líderes más importantes de la *Democrazia Cristiana* (DC) en ese momento³⁶. Sin embargo, Scalfaro difícilmente podía buscar un Ejecutivo regenerador ya que el Parlamento elegido por los italianos era previo a que se conocieran todos los temas de corrupción y por tanto entre demócratacristianos y socialistas podían bloquear la acción legislativa de cualquier gobierno. En efecto, entre los primeros (112)

³⁶ Quienes por cierto intentaron cubrirse de la acción de la Justicia italiana, provocando la consiguiente rebelión dentro de su partido. La dirección oficial de la DC había presentado una demanda sobre la posible manipulación de los «arrepentidos» (los que hablaban en contra de sus jefes supuestamente para salvarse), pero la iniciativa, que el líder de la izquierda, Achille Occhetto, criticaría como reflejo de una línea de defensa característica de los «mafiosos», era claro que trataba de dar apoyo a Giulio Andreotti y a los otros tres dirigentes democristianos investigados por presuntas conexiones con la delincuencia organizada: los napolitanos Antonio Gava y Paolo Cirino Pomicino, y también al calabrés Riccardo Misasi. «Es una iniciativa desconcertante, inoportuna e inadecuada», afirmaría Rosario «Rosy» Bindi, líder de la DC de Venecia y la nueva figura más destacada de la izquierda del partido. En términos similares se expresó Pierluigi Castagnetti, jefe del gabinete del Secretario General de la DC, Mino Martinazzoli. «Andreotti debe irse a casa, y sobre Gava, no hace falta dar más juicios», añadió Castagnetti. Véase al respecto *Corriere della Sera*, 6 aprile 1993.

y los segundos (51) tenían en total 163 votos de 325 votos posibles, con lo que, juntando el resto (que sumaban 162), no saldrían las leyes adelante. Así que forzosamente tendría que seguir habiendo democristianos y socialistas, pero la pregunta era quién encabezaría tal amalgama de partidos dentro de un mismo Gobierno.

Lo más llamativo es que, en plena crisis sistémica, los italianos tuvieron que acudir a las urnas para decidir sobre la nueva ley electoral. En efecto, casi 48 millones de italianos estaban llamados a votar en el «referéndum» por la reforma, en un sentido mayoritario, de la ley que regularía la elección del Senado. A diferencia de la Cámara de Diputados, donde la proporcionalidad era total, los dos tercios de los senadores italianos se elegían, a partir de entonces, por mayoría simple, pero siempre que el candidato superara el 65% de los votos emitidos en su distrito. Así, lo que el referéndum pedía era el consenso de los italianos para derogar ese umbral del 65%. Finalmente, el 20 de abril más de 30 millones de italianos, sobre 48 millones con derecho a voto, se pronunciaron a favor de la abolición del sistema electoral proporcional para la elección del Senado y, en general, por la reforma radical de un sistema político que había permitido el crecimiento abusivo del poder de los partidos. Un cambio en la ley electoral que había que atribuir a Sergio Mattarella (de ahí que la ley fuera llamada a partir de entonces «mattarellum»), años después vicepresidente (1998-2000) y presidente de la República (desde finales de enero de 2015 hasta el momento actual).

Este cambio en la ley electoral no transformaba la realidad política, que era un gobierno, el de Giuliano Amato, que estaba agonizando a la espera de encontrar un sustituto. Y ese sustituto llegó cuando el 23 de abril Amato presentó su dimisión y le sustituyó Carlo Azeglio Ciampi, hasta ese momento Gobernador del Banco de Italia. Era la primera vez que se recurría a un hombre sin adscripción política. El 29 de abril era presentado el nuevo Ejecutivo, en el que había once caras nuevas por trece ministros que repetían. La gran novedad radicó en que Ciampi formó un Ejecutivo que incluía a cuatro exponentes de origen comunista, tres de ellos del *Partido Democrático de la Izquierda* (PDS). Era por tanto un gabinete que podía ser calificado de histórico, ya que incorporaba a una oposición cuya sistemática exclusión del Gobierno había sido clave en la política de la Italia de la posguerra. Además, el nuevo Gobierno también incluía a un representante de los verdes y a un republicano, lo que, sumados a los cuatro partidos de la mayoría anterior (democristiano, socialista, liberal y socialdemócrata) debían, en principio, garantizar al Ejecutivo una aplastante mayoría parlamentaria. Así, la oposición pasaría a estar formada por los postfacistas, por la *Refundación Comunista* y, sobre todo, por la *Liga Norte*. No resulta por tanto de extrañar que el

líder de esta última formación, Umberto Bossi, afirmara nada más conocer la composición del Gobierno: «Somos el verdadero enemigo. No hemos tenido ningún contacto telefónico, porque no hay líneas de comunicación entre adversarios. Ciampi es el régimen y nosotros el anti régimen»³⁷.

Entre los nombres más destacados del nuevo Gobierno se encontraba el de Luigi Spaventa, formado en el *King's College* de Cambridge y en Roma, catedrático y exdiputado de la izquierda independiente, al que se nombró ministro de Hacienda; Vincenzo Visco, uno de los economistas más destacados del PDS y nuevo ministro de Presupuestos; y Piero Barucci, que había estado en el anterior Gobierno, sería el ministro del Tesoro. Igualmente, hay que destacar la presencia de Alfonso Barbera, conocido senador excomunista y que ahora sería Ministro de Relaciones con el Parlamento, y de Luigi Berlinguer, primo del fallecido líder del *Partido Comunista de Italia* (PCI) y nuevo Ministro de Universidades. Respecto al miembro de los republicanos, el elegido era Antonio Maccanico, subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros y hombre por tanto de la máxima confianza de Ciampi en virtud del puesto que ocuparía, mientras que el representante de los «verdes» sería Francesco Rutelli, quien como era lógico ocuparía la cartera de Medio Ambiente. Por otra parte, Ciampi no quiso prescindir de un hombre de la valía de Beniamino Andreatta (mentor del futuro primer ministro Romano Prodi), pero no pudo impedir hacerle pasar de Presupuestos a Asuntos Exteriores. En Interior repetía el democristiano Nicola Mancino, mientras que la cartera de Justicia seguiría en manos del independiente Giovanni Conso.

El nuevo Ejecutivo en todo caso mostraba tres rasgos fundamentales: las carteras del área económica quedaban en manos de reputados especialistas en la materia; se daba un giro a la izquierda al dar entrada a los excomunistas; y se hacía palpable la pérdida de fuerza de los dos partidos más salpicados por la corrupción, que no eran otros que el democristiano y el socialista. Porque ahora había cuatro ministros socialistas, frente a seis en el anterior Gabinete; y nueve democristianos, frente a los once que había antes. Pero Ciampi, quisiera o no, no podía quitarse ni a unos ni a otros de encima, porque tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado sus votos resultaban fundamentales. En todo caso, se trataba, sin saberlo, del segundo y último intento del presidente Scalfaro por salvar la legislatura y tratar de recuperar la normalidad en un clima de crispación permanente por los constantes asuntos de corrupción.

Sin embargo, las cosas no comenzarían nada bien, ya que el nuevo Gobierno sufrió su primer encontronazo con la clase política al día siguiente

³⁷ *Corriere della Sera*, 29 aprile 1993.

de comenzar a ejercer precisamente a cuenta del procesamiento de Bettino Craxi, que fue rechazado por el Parlamento. La consecuencia fue que Ciampi se encontró con la dimisión en su mesa de varios de sus ministros menos de una semana después de haber sido nombrados: se trataba de Antonio Barbera, Francesco Rutelli, Vincenzo Visco y Luigi Berlinguer. Así que fueron sustituidos de manera inmediata por otros cinco nombres: Paolo Barile, Livio Paladin, Valdo Spini (que cogió la cartera de Francesco Rutelli mientras la suya era ocupada por Paladin), Franco Gallo y Umberto Colombo. Por suerte para Ciampi, ya no tendría que sufrir más bajas en su gabinete hasta ya el primer día del año 1994 (en que Raffaele Costa abandonó la cartera de Marina Mercantil) y el 19 de abril de 1994, en que varios ministros (Mancino, Andreatta y Savona) se marcharon en lo que eran los estertores del Gobierno Ciampi, que finalizaría el 9 de mayo de 1994, superando, a diferencia del Gobierno Amato, el año de vida, aunque sólo fuera por unas semanas.

El nuevo Gobierno comenzaría a andar el 14 de mayo, un día después de haber obtenido la confianza del Senado, donde obtuvo 162 votos a favor por solo 36 en contra y 50 abstenciones. Como suele ser normal en la política italiana, no faltó la incertidumbre hasta el último momento, ya que Ciampi tuvo que estar negociando hasta justo antes de la votación para que algunos sectores de la *Democrazia Cristiana* (DC) y los liberales no se abstuvieran. Debe recordarse que el reglamento del Senado establecía que las abstenciones se sumaban a los votos negativos, por lo que la investidura de Ciampi corrió el riesgo de quedarse sin suficiente *quorum*. Por tanto, la confianza en el nuevo Gobierno se mantuvo casi hasta el último momento a pesar de que los partidarios de la abstención se habían coordinado para que en la sala quedaran los senadores suficientes que garantizaran el *quorum* legal del 51% de los escaños. En su discurso Ciampi dedicó mucho tiempo a explicar que su Gobierno actuaría «con plenos poderes» y sin más plazos que los que dictara el Parlamento.

9. LA CORRUPCIÓN SIGUE SIN DAR TREGUA

Lo que el nuevo Gobierno no podía evitar es que la corrupción siguiera omnipresente en la vida política italiana. El mismo día en que Ciampi pedía la confianza para su gobierno (13 de mayo), Franco Nobile, Presidente del *Istituto per la Ricostruzione Industriale* (IRI, en ese momento primer grupo empresarial del Estado italiano) era detenido por la Policía italiana por la

razón de casi siempre: la corrupción vinculada a la financiación ilegal de los partidos políticos. Lo más llamativo es que Nobili, democristiano y muy cercano al ex primer ministro Andreotti, era detenido no por su actividad al frente del *IRI* (a la que había accedido en noviembre de 1989), sino por sus años anteriores, en los que se había dedicado al sector de la construcción. Así, los jueces milaneses investigaban a Nobili por unas comisiones vinculadas a la construcción de una central eléctrica para el grupo estatal *ENEL*, que Nobili habría pagado cuando era presidente de la *Cogefar*, antes de que esa empresa constructora fuera adquirida por el grupo *Fiat*.

Al día siguiente era su amigo Andreotti quien sufría la acción de la Justicia, al autorizar el Senado su procesamiento por presunta asociación con la Mafía. Lo más llamativo es que fue el propio Andreotti quien pidió a la cámara la autorización para dicho enjuiciamiento, lo que hizo con las siguientes palabras:

Estoy aquí para pedir a todos los colegas un voto favorable a la autorización de mi procesamiento... Puedo decir, confiando sin duda también en la justicia terrena, que la tranquilidad de mi conciencia reposa en la certeza de que hay un tribunal que está por encima de toda contingencia y de toda mezquindad: el tribunal de Dios³⁸.

Y la cámara, por aplastante mayoría, se lo concedió. De esta manera, los dos principales dominadores de la vida política durante los años ochenta (Andreotti y Craxi) se veían ante la tesitura de rendir cuentas ante la Justicia italiana, si bien el horizonte judicial de Craxi era mucho más complicado, con casi una decena de sumarios abiertos por corrupción.

Mientras, el Gobierno Ciampi tomaba las primeras decisiones. El 16 de mayo nombraba a Romano Prodi nuevo presidente del *IRI*, en lo que suponía el inicio de una fulgurante carrera política que le llevaría a presidir dos gobiernos (el de 1996-98 y el de 2006-08) y también a presidir la Comisión Europea (1999-2004). Prodi era en ese momento uno de los economistas italianos más conocidos en el extranjero y se encontraba cercano a la democracia cristiana de izquierdas. En ese sentido, se le había designado para el cargo con el fin de que cumpliera una misión muy clara: relanzar el proceso de privatización de la industria estatal italiana. Prodi sabía muy bien el terreno que pisaba, ya que había sido ministro de Industria en 1978 y presidente del propio *IRI* entre 1982 y 1989 (con el apoyo de Ciriaco De Mita). Parece ser que Prodi había sido candidato a la presidencia del Consejo de Ministros antes que el propio Ciampi, pero había tenido que renunciar por

³⁸ *La Repubblica*, 14 mayo 1993.

el veto que le habían puesto los excomunistas, claves en la formación del nuevo Gobierno. Ahora presidiría de nuevo el IRI, pero, a diferencia de la etapa anterior, en esta ocasión lo dirigiría con la idea de ir desmantelándolo a fin de que el Estado italiano pudiera ir reduciendo su abultada deuda pública y recuperara la confianza de los mercados.

El 22 de junio se celebraba la segunda vuelta de las elecciones municipales, que afectaban a un total de 145 entes locales. Y en ellas se confirmó la grave anomalía que sufría la política italiana: mientras en las dos cámaras parlamentarias democristianos y socialistas³⁹ mantenían la hegemonía fruto de las elecciones generales del año anterior, en cambio, ahora, los socialistas demostraban estar en caída libre y los democristianos, sin sufrir una pérdida tan importante de votos, también mostraba una profunda crisis de confianza entre el electorado. En cambio, había dos fuerzas emergentes: los excomunistas, por la izquierda, y la *Liga Norte*, por la derecha. Y eso que aún faltaba un año para que apareciera en la política italiana el empresario Silvio Berlusconi⁴⁰, con el que se confirmaría el hundimiento de los partidos

³⁹ El 13 de julio Giorgio Benvenuto, el exsindicalista que Bettino Craxi había aceptado como su único sucesor posible al frente del *Partido Socialista Italiano* (PSI), anunció su salida del partido, al que calificó de, sencillamente, «inexistente». Benvenuto había dimitido el 20 de mayo como secretario general del PSI tras sólo 96 días de mandato, al tiempo que denunciaba las maniobras de la vieja guardia craxiana para impedir cualquier renovación interna. El ex secretario general explicó su decisión de salir del PSI como un deseo de poner fin a la polémica que le enfrentaba a la nueva dirección del partido, encabezado ahora por otro ex sindicalista, el fiel craxiano Ottaviano Del Turco. Con su marcha, el PSI estaba prácticamente visto para sentencia, a la espera de que las elecciones de 1994 certificaran el fin de la formación de izquierdas que tanto protagonismo había tenido en Italia desde finales de los setenta hasta comienzos de los noventa.

⁴⁰ Silvio Berlusconi (1936-) era un conocido empresario italiano que había hecho sus primeros negocios en el mundo de la construcción y luego había dirigido todos sus esfuerzos para la creación de un imperio mediático que se conocería bajo el nombre de *Mediaset*. En 1977 recibió el reconocimiento del Estado italiano, que le nombró *cavaliere*, y a comienzos de los noventa sus televisiones llegaron a España con la puesta en marcha de los primeros canales privados, destacando *Telecinco*, que no sólo se ha mantenido hasta nuestros días, sino que incluso lidera el conjunto de los canales privados. Además, entraría en el mundo del fútbol profesional al hacerse con la presidencia del Milan A.C. a mediados de los ochenta y, finalmente, daría el salto a la política a comienzos de los noventa con la creación de su propio partido (*Forza Italia*), siendo primer ministro hasta en tres períodos diferentes (1994-95, 2001-06 y 2008-11). Su declive político se iniciaría en noviembre de 2011, cuando, ante la profunda recesión económica en la que vivía el país, hubo de presentar anticipadamente su dimisión. En noviembre de 2013 fue expulsado del Parlamento por estar condenado en sentencia firme debido a un delito de fraude fiscal. Todavía se

tradicionales y la emergencia de nuevas formaciones que dominarían la vida política italiana durante el cuarto de siglo posterior.

Mientras, el Gobierno Ciampi, recién estrenado, debía gobernar con la mayoría surgida el año anterior. Y el 4 de julio de 1993 pudo apuntarse su primer tanto de importancia en el combate de la crisis económica cuando empresarios y sindicatos llegaron ayer a un pacto social con el objetivo de mantener las negociaciones salariales dentro de lo que se consideraba «(...) límites coherentes con las tasas de inflación programadas y asumidas como objetivos comunes» entre los agentes sociales y el Gobierno. Las negociaciones culminaban así un laborioso proceso de dos años a través del cual el marco de las relaciones laborales era renovado, pasándose de un sistema de revisión automática de los salarios en función de la inflación a otro de inflación programada para mantener la competitividad en los mercados internacionales. Eso sí, se mantenía vigente el Estatuto de los Trabajadores de 1970⁴¹ y no sería hasta la Navidad de 2014, con Matteo Renzi como primer ministro, cuando se llevara a cabo una auténtica reforma laboral con el objetivo de atraer las inversiones extranjeras. De tal manera que, a pesar de este importante acuerdo, el mercado laboral italiano seguiría marcado por la rigidez.

Mientras, la sombra de la corrupción seguía sobrevolando la política italiana. Y en este caso iba a afectar muy directamente a un sector central en la vida de cualquier país, como era la Sanidad. En efecto, el suicidio de Antonio Vittoria, decano de la Facultad de Farmacia de Nápoles, puso de manifiesto la conexión entre la Universidad y la política, ya que se interceptaría una conversación telefónica interceptada entre este catedrático y decano con el ministro de Sanidad, el liberal Francesco De Lorenzo, también napolitano, en el que Vittoria le dijo con toda claridad: «Sácame de este embrollo, porque si vienen a detenerme, acabo con todo». Y el “embrollo” se encontraba en relación directa con las investigaciones sobre el cobro de comisiones ilegales en el sector farmacéutico.

Parece ser que, antes de quitarse la vida, el profesor universitario había dejado depositado en un banco un manuscrito en el que narraba con

mantiene en activo en la política, pero ya con la salud muy mermada debido a las dos operaciones de corazón que ha sufrido (una en 2006 y otra en 2016).

⁴¹ Como recuerda Silvio Lanario, el Estatuto de los Trabajadores, ratificado de manera definitiva el 20 de mayo de 1970, incluía el reconocimiento del sindicato de empresa, la posibilidad de reunirse en asamblea en el centro de trabajo, así como prohibía el despido no motivado por lo que se denominaba «causa justa» (el célebre artículo 18, que tantas controversias generaría), la reducción del horario de trabajo e importantes medidas para mejorar la seguridad en las fábricas. Así lo señala Lanario en su obra *Storia dell'Italia repubblicana*, Venezia: Marsilio, 1992, p. 360.

todo detalle los mecanismos y procedimientos por los que las industrias farmacéuticas italianas lograban hacer subir los precios de sus productos mediante el pago de comisiones en el seno del organismo regulador correspondiente. Según la prensa, todo ese tráfico de comisiones giraba en torno a la figura del entonces ministro de Sanidad De Lorenzo, cuyo antiguo secretario, Giovanni Marone, había sido quien había destapado los negocios sucios de la sanidad italiana, desde este asunto de los precios hasta las comisiones pagadas por la adjudicación de la campaña de prevención del SIDA a las televisiones⁴². En esta ocasión, no habría dimisión del ministro de Sanidad, ya que Francesco De Lorenzo, como se ha señalado anteriormente, había dejado el ministerio antes incluso de que Amato presentara su dimisión y ahora la cartera de Sanidad corría a cargo de Mariapia Garavaglia, quien, por cierto, había sido subsecretaria precisamente de Sanidad, no el Gobierno Amato, sino en el anterior de Andreotti, donde también había desempeñado De Lorenzo el cargo de ministro.

Mientras, la democracia cristiana hacía todo lo posible por intentar salvar su propio partido, símbolo como ningún otro de la Historia de la I República italiana. Así, el 24 de julio, cerca de 300 delegados, de los que sólo 80 eran parlamentarios, celebraron una asamblea del partido que se presentaba como decisiva para el futuro de la gran formación confesional. Mino Martinazzoli, su secretario general, apostaba por una renovación moderada que no implicara riesgos de fractura definitiva en la ya maltrecha unidad del partido: en otras palabras, que la profunda crisis no pudiera dar lugar a escisiones. Lo que sí parecía ya bastante probable era el cambio del nombre de *Democracia Cristiana* por el de *Partido Popular Italiano* (PPI), retornando, por tanto, a sus orígenes prebélicos. En ese sentido, Martinazzoli pretendía una síntesis de lo viejo y de lo nuevo: «Tras el Partido Popular de Sturzo y la DC de De Gasperi, se abre un periodo político completamente diferente. Debemos captar el signo de los tiempos y actuar en consecuencia, como aquellos grandes hombres»⁴³, dijo. En lo que se refiere a las reformas, el 4 de agosto el Senado daba «luz verde» a la nueva ley electoral. La Cámara de Diputados había aprobado la nueva ley horas antes y el trámite en el Senado no introdujo ninguna enmienda. La nueva ley se aplicaría en las siguientes elecciones, que sin saberlo los italianos tendrían lugar menos de un año después. La reforma electoral suponía, en ese sentido, una revisión institucional de un Estado envejecido cuyos ciudadanos veían en el nuevo sistema mayoritario que iba a implantarse el modo de mandar a casa a la

⁴² Véase al respecto *La Repubblica*, 5 julio 1993.

⁴³ Véase al respecto *Corriere della Sera*, 24 julio 1993.

clase política corrupta que había gobernado el país durante los años. A partir de ese momento, la Cámara de Diputados y el Senado serían elegidos en un 75% por el sistema mayoritario, mientras que el 25% restante quedaría sometido al sistema proporcional corregido. Las elecciones se harían a una sola vuelta y con dos papeletas, una para cada sistema.

LA LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO, PRIORIDAD DEL GOBIERNO CIAMPI

La crisis de *Tangentopoli* había dejado como una de las principales consecuencias un importante aumento del desempleo en Italia, donde había a mediados de 1993 casi tres millones de parados y una tasa media del 12.40%. Ante las malas previsiones del otoño, el primer ministro Ciampi decidió convocar a los ministros económicos del Gabinete para intentar atajar el problema, con tres líneas fundamentales de actuación: crear nuevo empleo aprobando inversiones por 30 billones de liras en infraestructuras; localizar todos los puestos de trabajo disponibles y recurrir a la regulación de empleo (por tanto, aflorar economía sumergida); y aumentar tanto las jubilaciones anticipadas como el grado de movilidad de los trabajadores.

Para ello había, entre otras cosas, que desbloquear una serie de obras públicas, empezando por la alta velocidad ferroviaria, proyecto que llevaba paralizado siete años y que, según el ministro de Transportes (Carlo Bernini), podía dar trabajo ya en 1994 a 50.000 personas y, en sus alrededor de seis años de duración, a casi 350.000. Carreteras, aparcamientos y viviendas serían también sectores de intervención inmediata. Lo que por otra parte no resultaba nada fácil dada la precaria situación del sector financiero italiano. A ello ayudarían también iniciativas privadas como la de la poderosa *FIAT*, que a comienzos de septiembre había decidido poner en marcha un proceso de construcción del nuevo modelo automovilístico denominado «Fiat Punto» en su planta de Nápoles, con el que esperaba dar trabajo a 18.000 napolitanos. Y también gestos personales en el terreno de la clase política, como por ejemplo el que hizo el primer ministro Ciampi (9 de septiembre), quien renunciaría a su sueldo como presidente del Consejo de Ministros con el fin de dar ejemplo en la política de austeridad económica que preconizaba el Gobierno. Ciampi consideraba suficiente la pensión que percibía del Banco de Italia. Seis años después los italianos le premiarían con la presidencia de la República por su comportamiento modélico en un momento extremadamente delicado.

La decisión personal de Ciampi era solo un anticipo del fuerte ajuste que el Gobierno presentaría sólo dos días después al dar a conocer los Presupuestos Generales del Estado para el año 1994. Los recortes ascenderían a un total de 28 billones de liras al tiempo que se incrementaban los ingresos en tres billones de liras. Así, el ajuste presupuestario aprobado pretendía reducir un 7% el déficit del Estado para situarlo en 144 billones de liras en 1994. Los empleados públicos, cuyos salarios habían quedado congelados durante 1993, deberían aceptar aumentos salariales no superiores al 3.5% de tasa de inflación prevista, y los que quisieran jubilarse antes de los 60 años tendrían una creciente reducción de la pensión, que iría del 2% hasta un máximo del 47% si no habían cotizado al menos durante 35 años. Mientras, en el terreno fiscal se reducían las deducciones y se anunciaba un aumento del IVA y de otros impuestos indirectos. Mientras, en el sector sanitario se preveía una ampliación de la llamada tasa de la salud, que sería cada vez más cara. A partir de ese momento, habría que pagar 4.000 liras por receta médica, con la sola excepción de ancianos y niños de hasta 12 años. Las medicinas, a su vez, quedaban divididas en tres tramos: las consideradas «salvavidas», que no necesitarían cheque; los fármacos considerados esenciales, que tendrían un cheque del 50% del precio; y el resto, que se pagarían en su totalidad. En lo que se refiere a la enseñanza, habría reducción de personal, cierre de las clases sin alumnos y eliminación de las suplencias de profesores para el año siguiente: además, el director del centro tendría que desempeñar también las funciones de gerente.

Igualmente, el ajuste incluía una reducción del 15% de los soldados destinados al servicio militar. También se esperaban ingresos por parte de la venta de inmuebles de los entes públicos y de previsión social a fin de que el ajuste no recayera sólo sobre las personas físicas. Por último, se esperaba ahorrar entre 10 y 12 billones de liras gracias a remodelaciones y cortes presupuestarios a los fondos de los ministerios⁴⁴. No olvidemos que, en el Gobierno Ciampi, entre el primer ministro, el vice primer ministro, los ministros y los ministros sin cartera había hasta 34 cargos diferentes, lo que constituía un excesivo gasto público para la gobernabilidad de un país como Italia.

Para ese momento, Giulio Andreotti había comenzado a ser interrogado por su posible implicación en el asesinato del periodista Mino Pecorelli en 1979⁴⁵, al tiempo que Bettino Craxi veía cómo le abrían un nuevo sumario

⁴⁴ Así se informó en *Corriere della Sera*, 11 settembre 1993.

⁴⁵ Carmine «Mino» Pecorelli era el Director de un semanario (el *Observador Político*), considerado de ideología derechista. El 22 de marzo de 1979 fue asesinado en el centro de Roma con un tiro en la boca y cuatro en la nuca, cuando acababa de

en relación con el cobro de comisiones ilegales derivadas del denominado caso *Enimont*, la frustrada fusión entre el grupo químico *Montedison* y la compañía nacional de energía *ENI*. Con este, Craxi tenía abiertos ya más de 20 sumarios, y aún le quedaban muchos juicios que afrontar. Y lo peor es que el Parlamento seguía sin asumir que debía colaborar al máximo con los jueces de *Mani Pulite*, como se puso de manifiesto el 3 de octubre de 1993. En efecto, por aquellos días los parlamentarios italianos se negaron a permitir la detención del exministro de Sanidad Francesco De Lorenzo. El presidente Scalfaro, abochornado, quiso disolver el Parlamento, calificando el voto de «inadmisible», pero al final tuvo que renunciar a ello (cinco parlamentarios dimitirían de su escaño en protesta por las palabras de Scalfaro) al no estar finalizado el proceso de aprobación de la nueva ley electoral. Eso sí, los jueces siguieron con su labor y por ello pidieron a los diputados que levantaran la inmunidad a los democristianos Arnaldo Forlani, ex primer ministro y una de las figuras más destacadas de la *Democracia Cristiana*, y de Giovanni Prandini, exministro de Obras Públicas, en relación al recurrente delito de cobro de comisiones ilegales.

Era tal el grado de putrefacción en el que se encontraban las instituciones italianas que el Gobierno tuvo que llevar a cabo un importante proceso de depuración de sus servicios secretos. En efecto, el ministro de Defensa⁴⁶, Fabio Fabbri, anunció el 10 de octubre la salida inmediata del cuerpo de unos 300 agentes (500 según otras fuentes), entre los que, al parecer, figuraban directores generales y otros altos cargos. La iniciativa gubernamental se inscribía en el contexto de las permanentes sospechas de actuaciones en conexión con el terrorismo y la Mafia de sectores significativos de tales

entrar en su coche. Pecorelli, que era también abogado y estaba considerado el periodista «más temido y despreciado» del país, había convertido en semanario lo que al principio era sólo una agencia de noticias políticas y económicas «escandalosas» inspiradas por los ambientes de la extrema derecha y, al parecer, por personales de los servicios secreto del ex DID (Servicio de Información de la Defensa). Hasta su asesinato, sobre su persona habían llovido un diluvio de acusaciones de compañeros periodistas y de políticos, pero nunca había sido condenado. Eso sí, el gremio de periodistas lo había expulsado por calificarle de «indeseable». El atentado fue reivindicado por un grupo de revolucionarios anarquistas que, según la Policía, no poseía credibilidad alguna, y que exigían la dimisión del Gobierno Andreotti. De ahí que algunos consideraran que Andreotti había estado implicado en la eliminación física de Pecorelli. Véase al respecto *Corriere della Sera*, 22 marzo 1979.

⁴⁶ Por cierto, que Ciampi logró parar la dimisión del Ministro de Industria, Paolo Savona, quien había mostrado abiertas discrepancias con la manera en la que Romano Prodi estaba llevando a cabo el proceso de privatizaciones. Savona presentó formalmente su dimisión, pero finalmente Ciampi le convenció para que siguiera en el cargo.

servicios, y que había tenido como consecuencias, entre otras cosas, al asesinato de los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino un año antes. Como ejemplo de ello, se recordó la detención, el año anterior, del agente del SISDE Bruno Contrada, comisario de Palermo, que, al parecer, había protegido al capo de la Mafia Salvatore «Toto» Riina y otros miembros de la cúpula mafiosa durante años.

Las crisis se sucedían y el 29 de octubre el primer ministro Ciampi tuvo que sufrir una huelga general que fue ampliamente secundada por los trabajadores italianos. Eran momentos en los que se llegaba a cuestionar la propia figura del presidente de la República Scalfaro, al que se acusaba de haberse quedado con dinero de los servicios secretos cuando era ministro del Interior (1983-87). Como era de esperar, su primer ministro Ciampi salió rápidamente en su defensa, al tiempo que nunca se pudo probar que Scalfaro hubiera cometido ningún tipo de delito. En esta situación, parecía evidente que la convocatoria de las elecciones para un nuevo Parlamento era cada vez más urgente. Sin embargo, Scalfaro, Ciampi y lo que quedaba de los viejos partidos querían retrasar dicha convocatoria lo máximo posible. Antes, necesitaban resolver la galopante crisis económica y recuperar la estabilidad institucional, pero sabían que lo estaban haciendo con un Parlamento cada vez más deslegitimado por los asuntos de corrupción. Sin embargo, la realidad ponía de manifiesto que, cuanto más se aplazaba la consulta electoral, mayores eran los escándalos que saltan a las primeras páginas de los periódicos. Escándalos que afectaban no sólo a la clase política, sino también al mundo empresarial: el caso *De Benedetti*, después de la inculpación de nueve directivos de la *Fiat*, mostraba una Italia en la cual la corrupción era componente esencial de todo el entramado económico-social.

Scalfaro y Ciampi lo tenían cada vez más difícil para impedir una nueva convocatoria de elecciones generales, ya que cada vez eran más las fuerzas políticas que lo demandaban. El postfascista Gianfranco Fini pidió la dimisión del Gobierno y afirmó estar dispuesto a promover una «alianza popular» o movimiento de derecha con el que traer el cambio político. Contrario a la continuidad del Gabinete se mostraba también el líder de la *Liga Norte*, Umberto Bossi, y eso que no había salido tan bien parado de aquellas elecciones. Diferente era la posición de Achille Occhetto, secretario del *Partido Democrático de la Izquierda* (PDS), el claro vencedor de las elecciones. Occhetto se comprometería a lograr que se aprobaran los presupuestos y a sostener al Gobierno hasta esa fecha, pero, eso sí, dejó claro lo que pasaría después: «habrá que ir a votar»⁴⁷. Lo que Occhetto desconocía es que cuando

⁴⁷ *Corriere della Sera*, 24 novembre 1993.

llegara el nuevo momento de votar, habría un nuevo actor, la *Forza Italia* de Silvio Berlusconi, que rompería por completo la precaria hegemonía de la izquierda italiana. Mientras, el Gobierno Ciampi dispondría de tiempo para intentar sacar al país de la crisis económica. Y para ello resultaba fundamental continuar con la privatización de empresas públicas italianas, siendo una fecha clave, en ese sentido, la del 5 de diciembre, cuando se dio a conocer el precio de las acciones del *Banco de Crédito Italiano* (BCI) con la previsión de que la entidad contaría en poco tiempo con más de 100.000 accionistas privados. La venta del mayor banco del Estado italiano podía constituir un paso histórico para que Italia desmantelara su mastodóntico sector público, uno de los mayores de Europa. En ese sentido, se esperaba que en los primeros seis meses de 1994 la operación reportara unos beneficios de 1.8 trillones de liras, un dinero que se utilizaría para recapitalizar las cuantiosas pérdidas del sector público italiano⁴⁸.

Las elecciones municipales celebradas en las principales ciudades del país dieron un nuevo triunfo al partido emergente en aquel momento (el *Partido Democrático de la Izquierda* (PDS). En efecto, entre las 129 ciudades italianas que debían elegir nuevo alcalde se encontraban varias de las más importantes: además de la propia capital (Roma), también estaba en la principal urbe del sur de Italia (Nápoles), uno de los mayores núcleos comerciales (Génova) y la capital de la región más rica de Italia (Véneto, nos referimos lógicamente a Venecia).

Así, tras una primera vuelta celebrada el pasado 21 de noviembre, se confirmaba la victoria del «verde» Francesco Rutelli sobre el Secretario General del neofascista *Movimiento Social Italiano* (MSI), Gianfranco Fini, y además por una diferencia de entre 8 y 10 puntos. Una ventaja similar otorgaba el triunfo en Nápoles al excomunista Antonio Bassolino, frente a Alessandra Mussolini, la nieta de Benito Mussolini y dirigente ultraderechista. Mientras, Génova pasaba a manos del magistrado Adriano Sansa, candidato de la izquierda, que se imponía por cerca de 20 puntos al candidato de la *Liga Norte*. Finalmente, en Venecia, el filósofo Massimo Cacciari, apoyado por el bloque progresista, triunfaba por casi 14 puntos sobre Aldo Mariconda, también de la *Liga Norte*. Un triunfo este último que debía ser resaltado, ya que el Veneto había sido siempre un importante feudo de la derecha, pero la corrupción no perdonaba⁴⁹.

El 14 de enero, cuando solo llevaba ocho meses al frente del Gobierno, Carlo Azeglio Ciampi decidió presentar su dimisión al presidente Scalfaro

⁴⁸ *Corriere della Sera*, 5 dicembre 1993.

⁴⁹ Véase al respecto *Corriere della Sera*, 6 dicembre 1993.

para que este dispusiera de plena libertad de disolver el Parlamento y pudieran celebrarse elecciones generales cuando Scalfaro lo considerara más conveniente. La decisión de Ciampi, como era de esperar, no gustaría a la mayoría de los democristianos y de los socialistas, sabedores de que probablemente no serían reelegidos y que podrían ir a la cárcel por corrupción. «En nuestra opinión, no hay ya ninguna justificación para una dimisión inmediata del Gobierno. El debate ha demostrado que en este Parlamento hay una mayoría de Gobierno», afirmó Gerardo Bianco, Portavoz de la *Democrazia Cristiana* (DC) en la Cámara de Diputados. Parecidas fueron las palabras de Ugo Intini, «mano derecha» de Bettino Craxi: «Existe una mayoría parlamentaria favorable al Gobierno, y disolver las cámaras en tal situación resulta forzado». Pero Scalfaro no aceptó la dimisión del primer ministro Ciampi, pero sí disolvería (16 de enero) el Parlamento y convocaría elecciones generales para el 27 de marzo. La razón de su decisión fue muy clara: el Parlamento existente había quedado deslegitimado por la cantidad de parlamentarios procesados y por la corrupción que rodeaba a los partidos a los que representaba, pero, eso sí, dada la gravedad de la situación política, el Gobierno debía mantenerse en plenas funciones para que no se pudieran producir vacíos de poder. En ese sentido, el presidente de la República destacaba la aprobación en el «referéndum» de abril de 1993 de la reforma electoral como manifestación de la voluntad del pueblo italiano de que se comenzara a aplicar ya. Y aprovecharía la doble carta que dirigió a los presidentes de las dos cámaras (Cámara de los Diputados y Senado) para defender la actuación de la Justicia en los dos últimos años:

Es justo constatar que, a estos cambios, ha contribuido también la actividad necesaria y válida de la magistratura, orientada a investigar y atacar las diversas patologías manifiestas en la gestión de la cosa pública, en la que se han visto implicados partidos, parlamentarios, administradores públicos, funcionarios y exponentes del mundo económico y financiero⁵⁰.

EL CAMINO HACIA LAS NUEVAS ELECCIONES

Las diferentes fuerzas políticas tenían ya marcado en el calendario una fecha clave, que debía abrir una nueva era en la Historia de Italia: el 27 y 28 de marzo. Una nueva era donde la *Democrazia Cristiana* (DC), tal y como la habíamos conocido al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ya no existiría como tal.

⁵⁰ *Corriere della Sera*, 16 gennaio 1994.

En efecto, el 19 de enero de 1994 se conocía que la DC ya no se presentaría bajo las mismas siglas e que, incluso, se partiría en dos: por un lado, se recuperarían las siglas del *Partido Popular Italiano* (PPI) de Don Luigi Sturzo (desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial) y lo harían con una clara vocación centrista; y por otro lado, se crearía el *Centro Cristiano Democrático* (CCD), con la idea de integrarse en el bloque de la derecha con la *Liga Norte* y, lo más novedoso, con el recién anunciado candidato Silvio Berlusconi, magnate de la televisión privada. De nada había servido, en ese sentido, el llamamiento a la unidad de los católicos lanzado un mes antes por el Papa Juan Pablo II.

Con ello se ponía fin al partido que había dominado la vida política italiana desde el final de la II Guerra Mundial y que había alumbrado nombres tan destacados como los de Alcide De Gasperi, Amintore Fanfani, Giulio Andreotti, Benigno Zaccagnini, Aldo Moro, Flaminio Piccoli, Francesco Cossiga, Arnaldo Forlani, Antonio Segni o Ciriaco De Mita. Respecto a las dos nuevas formaciones, Mino Martinazzoli sería la principal figura del PPI, mientras que el CDC estaría formada por una nueva generación (en aquel momento entre los 40 y 50 años de edad) en la que destacaban tres nombres: Pierferdinando Casini, Clemente Mastella y Francesco D'Onofrio. Fuera de ambas quedarían el longevo Amintore Fanfani y el excéntrico Francesco Cossiga.

Solo unos días después, Silvio Berlusconi anunciaba su salto a la política, algo que a muy pocos cogía por sorpresa. En efecto, el día 24 Berlusconi, Presidente del grupo *Fininvest*⁵¹ y del club de fútbol Milan A.C., anunció, que, a menos que sucediera «un milagro», daba por hecho su ingreso en política como candidato a las próximas elecciones italianas, a fin de evitar la implantación de «un régimen neocomunista» en el país, en clara referencia a la fuerza que en ese momento tenían los excomunistas del *Partido Democrático de la Izquierda* (PDS). En ese sentido, Berlusconi, que había fundado ya su propio partido político (*Forza Italia*), esperaba que se unieran a éste el *Partido Popular Italiano* (PPI) en lo que debería configurarse como un «frente moderado» en el que el presidente de *Fininvest* podía intentar incluir también a la *Liga Norte* y al *Centro Cristiano Democrático* (CCD) de Casini y Mastella⁵².

⁵¹ El 30 de enero Fedele Confalonieri le sustituía como Presidente del grupo *Fininvest*, para que Berlusconi pudiera dedicarse de lleno a la que iba a ser su primera campaña electoral, dado que, hasta ese momento, *Il Cavaliere* se había dedicado en exclusiva a sus negocios. Con el tiempo, se vería como una de las intenciones de Berlusconi al entrar en política era beneficiar a sus propias empresas, generando numerosos «conflictos de intereses» que serían denunciados en más de una ocasión por las instituciones europeas.

⁵² Véase al respecto *Corriere della Sera*, 24 gennaio 1994.

Ante la evidencia de que Berlusconi estaba conformando un bloque muy sólido que agrupara a la centroderecha, el centroizquierda reaccionó con una alianza conjunta que, en la práctica supuso la desaparición del tercer gran partido que había dominado la vida política desde la fundación de la República italiana⁵³: el *Partido Socialista Italiano* (PSI), que en las elecciones municipales de finales de 1992 había podido comprobar que se encontraba en caída libre. Así, la izquierda italiana anunció el 2 de febrero de 1994 que concurriría a las elecciones generales del 27 de marzo unida en un pacto denominado *Los Progresistas (I Progressisti)* que, además de incluir al PSI, integraría a siete formaciones más: *La Rete*, el *Partido Democrático de la Izquierda* (PDS), el *Partido de la Refundación Comunista* (RC), *Los Verdes*, *Alianza Democrática* (AD, donde estaban tanto exsocialistas como republicanos, socialdemócratas y democristianos), *Cristianos Sociales* (CS, otra escisión de la ya extinta *Democracia Cristiana*) y *Renacimiento Socialista* (RS).

Ahora lo difícil era, lógicamente, lograr articular un programa conjunto que tuviera la suficiente coherencia y en la que todos tuvieran voz y voto. Lo que sí estaba claro, en principio, era quién ejercería el liderazgo, que sería Achille Occhetto, aunque pronto se vio la división interna⁵⁴. Mientras, la centroderecha se reforzaba con la alianza de Berlusconi con Gianfranco Fini, que había refundido el postfacista *Movimiento Social Italiano* en un nuevo partido llamado *Alianza Nacional* (AN) para intentar vender una moderación ideológica y tratar de captar el voto conservador del centro de Italia, lo que finalmente lograría.

Faltaba, así, una formación que pudiera representar el centro político. Y no tardó en salir a la luz: el 6 de febrero se presentaba el *Pacto por Italia*, liderado por el democristiano Mario Segni y cuyo núcleo central era el

⁵³ Decimos tercera porque los comunistas habían caído, no por temas de corrupción, sino por cuestiones ideológicas, en 1991; y, ahora, al comienzo de 1994, la DC era la segunda gran formación en desaparecer como tal, en este caso por su estrecha relación con los numerosos asuntos de corrupción.

⁵⁴ Craxi, en su intento por arrastrar a los demás en su inevitable caída, presentó el 13 de febrero una denuncia judicial por financiación ilegal del partido contra varios miembros de la dirección del PDS, como Massimo D'Alema y Achille Occhetto. La denuncia iba acompañada de una memoria en la que Craxi reunía acusaciones contra el disuelto *Partido Comunista Italiano* (PCI) y su heredero, el PDS, ya expuestas a la opinión pública e incluso en el transcurso de un interrogatorio judicial realizado por el fiscal Antonio di Pietro. Craxi había reiterado que el PCI no cobraba comisiones ilegales de empresarios, porque le financiaban las cooperativas bajo su influencia a cambio de una participación sustancial en las obras públicas. Sin embargo, daba la impresión de que toda esta acusación quedaría en nada, ya que el ex líder socialista no aportaba pruebas de delitos concretos. Véase al respecto *Corriere della Sera*, 13 febbraio 1994.

Partido Popolare Italiano (PPI). Y dejaron claro que no serían la bisagra, lanzando mensajes a izquierda y derecha: «Ningún acuerdo con la izquierda, ni antes ni después del voto», afirmó Segni en relación a la coalición de izquierdas. Lo dijo para a continuación atacar a la derecha, focalizada en torno a Umberto Bossi, («no es de fiar», se limitó a decir Segni) y en torno a Silvio Berlusconi⁵⁵, al que acusó de ser un empresario que había crecido gracias a «los favores del viejo régimen», el mismo que había sido defenestrado por la realidad de los hechos. Otros dirigentes destacados serían el republicano Giorgio La Malfa, el exmiembro del PSI y ex primer ministro Giuliano Amato, y Mino Martinazzoli.

UNA NUEVA REALIDAD POLÍTICA PARA UN SISTEMA POLÍTICO VIEJO

Finalmente, los días 27 y 28 de marzo se celebraron las elecciones generales. El presidente Scalfaro pronunciaría una frase auténticamente profética cuando fue a votar: “Estas elecciones marcan un momento sin duda decisivo para la historia del país”. Y así sería, porque de ellas nacería un nuevo escenario político con muchas caras nuevas y también con unas cuentas formaciones políticas nuevas. Y, sobre todo, con el inicio de un auténtico estrellato político, el de Silvio Berlusconi, el hombre que no solo ha vencido en tres elecciones generales (1994, 2001 y 2008) y ha encabezado cuatro gobiernos diferentes (1994, 2001, 2005 y 2008), sino que más tiempo ha estado al frente del Consejo de Ministros en la Historia de la I República italiana (más de 3.000 días, superando los más de 2.500 que sumaron los siete gobiernos de Giulio Andreotti).

⁵⁵ Después de duras negociaciones entre ambos (porque Bossi no quería que Berlusconi le quitara la hegemonía del norte de Italia, en particular Lombardía, de donde originario el líder de *Forza Italia*), el día 11 de febrero hicieron pública su alianza política, en la que habría muchos vaivenes, pero la realidad es que, hasta el último momento de Berlusconi como primer ministro (noviembre de 2011), Bossi estuvo apoyándole. Curiosamente, un día después era detenido Paolo Berlusconi, el hermano de Silvio, por un presunto tema de corrupción. Nacido en 1950, era por tanto 14 años más joven que su hermano Silvio, y por ello su carrera empresarial había tenido lugar siempre a la sombra del futuro primer ministro. En el caso de Paolo, fue detenido el 12 de febrero por, presuntamente, haber pagado comisiones ilegales destinadas finalmente a democristianos y socialistas, comisiones realizadas en 1983 por cuenta *Cantieri Reuniti Milanesi*, una empresa de construcción que en aquel tiempo pertenecía aun plenamente al grupo *Fininvest* y, por tanto, a Silvio Berlusconi.

Y es que sólo había que ver lo que había sucedido en el Senado, la cámara donde más difícil era lograr una mayoría amplia. Aunque la fuerza política que más senadores tenía era la *Liga Norte* (porque concentraba su voto en todo el norte del país), con un total de 60, *Forza Italia* aportaba 36 y *Alianza Nacional* 48, lo que sumaba, en total, 144 votos. Las antiguas *Democracia Cristiana* (DC) y *Partido Socialista Italiano* (PSI) se hundían sin remisión: mientras el *Partido Popular Italiano* (PPI) se quedaba en los 34 senadores, el *Centro Cristiano Democrático* (CDC) se quedaba en 12 representantes. Si malas eran estas cifras para la democracia cristiana, lo obtenido por los socialistas podía ser calificado de sencillamente catastrófico: tan solo 10 senadores en una cámara que tendría hasta 326 componentes.

Mientras, el bloque de izquierdas, dividido a su vez en varios grupos parlamentarios, no llegaba siquiera a los 120 senadores. Era, en definitiva, la consecuencia lógica a un espiral interminable de corrupción que había dañado irremisiblemente no sólo a los partidos hegemónicos, sino también a algunos de los que parecían alternativa, como el PDS. El futuro era de momento para el bloque conformado por Silvio Berlusconi⁵⁶, Gianfranco Fini y Umberto Bossi, aunque aún habrían de esperar un tiempo hasta que los italianos depositaran por completo su confianza en ellos. Pero lo que ya nadie podía negar es que había surgido un nuevo sistema de partidos en el que, paradójicamente, solo sobrevivía con sus siglas la *Liga Norte* de Umberto Bossi, que dos décadas después también acabaría en el fango de la corrupción.

⁵⁶ Cuyos enfrentamientos con los diferentes presidentes de la República serían una constante. Ya había tenido problemas con Cossiga antes de entrar en política y luego tendría más discrepancias con Oscar Luigi Scalfaro (1992-99) y con Carlo Azeglio Ciampi (1999-2006). Así lo relata Marzio Breda en *La guerra del Quirinale. La difesa della democrazia ai tempi di Cossiga, Scalfaro e Ciampi*. Milano: Garzanti, 2006, pp. 117 y ss.

